

Recurso nº 22/2019

Acuerdo de 30 de enero de 2019, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sobre las medidas provisionales solicitadas en relación con el contrato de servicios “Servicio de mantenimiento integral de equipamiento de alta tecnología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (PA 35/18)”.

Con fecha 14 de enero de 2019, don Cándido Lozano Álvarez, en nombre y representación de la empresa ALTHEA Healthcare España, S.L. ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra los Pliegos, en su escrito de recurso solicita la suspensión del procedimiento de contratación ,alegando *periculum in mora*, ponderación de intereses concurrentes y buena fe.

El órgano de contratación se opone a la medida cautelar de suspensión del procedimiento, alegando *“ya que la eficacia de la resolución que se dicte en relación con el presente recurso está asegurada, con independencia de la medida de suspensión cautelar que se pudiera adoptar en esta fase del procedimiento.*

El retraso innecesario supondría la modificación de los importes de licitación contractuales, puesto que en alguno de los lotes, los importes de licitación están fijados en función de los vencimientos de las garantías que actualmente están vigentes.

El recurso afecta a un criterio de adjudicación que se considera en la fase última del procedimiento, apertura de proposiciones económicas y documentación técnica valorable mediante fórmulas, que tendría lugar el día 26 de febrero de 2019 a las diez horas, en acto público. Es decir, en un plazo superior a un mes desde la fecha. Es habitual que el recurso sea resuelto dentro de ese plazo, por lo que la suspensión del procedimiento, solo perjudicaría a los licitadores de buena fe.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258213747588615648585**

Adicionalmente, el órgano de contratación espera una mejora de los precios con respecto a los importes actuales del servicio, por lo que tiene interés en que el procedimiento finalice cuanto antes”.

El artículo 49.1 del LCSP, dispone sobre la solicitud de medidas provisionales que tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones del procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

El artículo 25 del RPER, aprobado por Real-Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, señala que fuera de los casos de la suspensión automática prevista en las leyes, el Tribunal podrá acordar motivadamente la adopción de medidas provisionales, incluida la suspensión del procedimiento, tanto a solicitud del recurrente como de oficio. En este último caso deberá, previamente, dar audiencia en relación con la adopción de las medidas al órgano de contratación, dándole un plazo de dos días hábiles para manifestar su conformidad o su oposición.

La suspensión del expediente de contratación , tiene por objeto evitar que con la adjudicación y posterior formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”.*



Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar Exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato. Con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación se evita que con la posible formalización del contrato se puedan causar otros perjuicios a los interesados afectados y especialmente al adjudicatario, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción y se evita que se produzcan situaciones que pudieran derivar en indemnizaciones a los perjudicados.

En la ponderación de las circunstancias del caso, la recurrente fundamenta su petición en asegurar la eficacia de la resolución. No obstante cabe considerar que en el caso de estimarse el recurso la anulación de los Pliegos en los términos que solicita la entidad recurrente llevaría consigo una nueva licitación con nuevos términos.

Considerando, además, la fecha de apertura de las proposiciones valorables mediante fórmulas afectadas por el recurso será el día 26 de febrero de 2019 y dado que previsiblemente la resolución del recurso se producirá con anterioridad a dicha



fecha, no se considera necesaria la adopción de la medida cautelar solicitada por el recurrente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público:

ACUERDA

Denegar la suspensión de la tramitación del procedimiento de licitación correspondiente al contrato de servicios “Servicio de mantenimiento integral de equipamiento de alta tecnología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (PA 35/18)”.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **125821374/38615648585**